

INTIMAR UNA *COMMISSIO*: UNA GARANTÍA DEL DERECHO DEL SIGLO XVII¹

THE PROTOCOL FOR SHOWING A LETTER OF COMMISSION: A LEGAL GUARANTEE IN THE SEVENTEENTH CENTURY

Beatriz CÁRCELES DE GEA
CSIC

Resumen

En el presente trabajo realizamos un análisis del protocolo de intimar o exhibir una carta de comisión al juez ordinario. Ello en el contexto de la reforma administrativa de la hacienda iniciada con el conde-duque de Olivares, que continuó avanzando hasta fin de siglo. Nos detenemos en un ejemplo acaecido en 1679, en Huete. En él veremos enfrentarse una garantía del derecho, como tal ejercía la intimación, y con ella todas aquellas garantías que ella misma salvaguardaba, con su limitación por el sistema de referencia de la hacienda, sus ministros y tribunales, cuya acción se adscribía a una *potestad económica* sin derecho que amenazaba con estar suelta. Se trataba de un conflicto legal que desafiaba un derecho ordinario que desobligaba, a cuyo servicio se colocaba la intimación, y que implicaba a los fundamentos jurídicos de la monarquía.

Palabras clave: Superintendentes, garantías del derecho, desobediencia, administración, jurisdicción.

Abstract

This article contains an analysis of the protocol for showing or presenting a letter of commission to an ordinary judge. This is in the context of the administrative reform of the tax office, which began with the duke of Olivares, and continued until the end of the century. We visit an incident that occurred in 1679, in Huete. In this incident we will see a legal guarantee, as exerted by this protocol, and with it all those guarantees that it safeguarded, with its limitation by the reference system of the tax office, its ministers and courts, whose action was ascribed to *oeconomicae* without law. It was a legal conflict that challenged an ordinary law that was without obligation, in whose service this protocol was made, and that implied the legal foundations of the monarchy.

Keywords: Superintendents, legal guarantee, disobedience, administration, jurisdiction.

¹ Este trabajo se ha llevado a cabo con el proyecto HAR2013-45788-C4-2-P, "*Pecunia rei publicae nervus*. Fisco, finanzas y negocio en la configuración de la monarquía hispánica (ss. XV-XVII)", del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

1. INTRODUCCIÓN

Con motivo de la reforma administrativa de la hacienda iniciada con el conde-duque de Olivares en los años 30, los conflictos entre justicias y administradores o superintendentes se sucedieron, como el signo de una contienda legal, porque con esa reforma se estaba desafiando el mismo *ius* de manos del derecho extraordinario. En este contexto de enfrentamiento las garantías jurídicas adquirieron un protagonismo destacado y decisivo, pues de ellas dependía la conservación del orden judicial, con la constitución del reino, además de su forma de gobierno. Y una de esas garantías, entreverada en las demás garantías del derecho, era el protocolo de la intimación de las comisiones –ahora se trataba de las de la hacienda–, ante la jurisdicción ordinaria. Se trataba de una exhibición de la carta de comisión que ponía en conocimiento del juez sus términos. Hemos elegido un conflicto que tuvo lugar en Huete durante el reinado de Carlos II, cuando ya hacía varios decenios que la reforma se había iniciado, que continuaba activa con nuevas y sucesivas medidas, sin que se hubiera conseguido contener los conflictos. Ello en un intercambio de procedimientos legales, que este ejemplo nos ilustra con toda su fuerza. El derecho ordinario es el que veremos manifestarse, como ocurrió con el resto de enfrentamientos que se sucedieron con la llegada de los nuevos superintendentes de la hacienda. Como tendremos ocasión de comprobar, la intimación no era sino un instrumento añadido, que, una vez efectuada, lejos de obligar al ministro requerido a obedecer al juez comisionado, estaba al servicio de esa desobligación que los administradores y superintendentes con sus nuevos poderes amenazaban, y que había que preservar con los variados instrumentos que proveía el derecho. Por tanto, la intimación facultaba la desobediencia del juez. En definitiva, este protocolo era una de esas armas jurídicas, que estando articulada en el orden judicial, activaba otras armas que veremos agregarse a ella, con la misma finalidad: garantizar la desobligación del derecho, la de la fórmula *desobedézcase pero no se cumpla*, inherente a la autoridad.

2. INTIMAR LA SUBDELEGACIÓN DE UNA COMMISSIO

En 1676 se habían establecido administradores generales en 21 provincias del reino. Tres años después, en 1679, en una provisión, de 18 de noviembre, del Consejo de Hacienda, dirigida al corregidor de Huete, Pedro de Herrera Ceballos, el rey menciona que Francisco Luengo de Eguía era juez comisionado para la administración y cobranza de las rentas reales y débitos en Huete y su partido. Entonces este administrador pidió licencia al gobernador de Hacienda para ir a la corte y subdelegar su comisión². Se le concedió y se le dio facultad para dicha subdelegación, la cual hizo en Baltasar de Orozco, regidor de la ciudad. Los subdelegados actuaban como *alter ego* del administrador o superintendente³, su nombramiento corría por cuenta de él, y solían recibir sus mismos poderes⁴, utilizándose en las cartas de subdelegación

² AHN (Archivo Histórico Nacional), Consejos, leg. 26.148, exp. 7, caja 2.

³ Vid. ANTOINE, M.: “La notion de subdélégation dans la monarchie d’Ancien Régime”, *Bibliothèque de l’école des chartes*, tomo 132, 2, 1974, pp. 267-287. Vid. también, CONCETTE-MARCANT, A. S.: “Les subdélégués généraux au siècle des lumières. Bilan de la recherche”, en M. Ortolani, O. Vernier y K. Deharbe (eds.), *Intendants et intendance en Europe et dans les Etats de Savoie, xviii-xix^e siècles*, Nice, 2015, pp. 181-198. Cfr. DIDIER, S.: “Deux modèles d’adaptation locale de l’administration de l’intendance: les subdélégués de Nouvelle-France et de Bretagne (1675-1763 et 1689-1790)”, *ibidem*, p. 279.

⁴ LANCTOT, G.: “Les fonctions de l’intendant”, *Report of the Annual Meeting of the Canadian Historical Association / Rapports annuels de la Société historique du Canada*, vol. 8, n.º 1, 1929, pp. 81-82.

con frecuencia la fórmula “sin limitación”. Un ejemplo tipo es el que recoge Juan de la Ripia, *Por tanto subdelego en el dicho señor fulano todas las dichas mis comisiones, según, y como las tengo de su majestad y señores de su Real Consejo de Hacienda sin limitación alguna para el efecto referido*⁵. No era raro que la facultad de subdelegar estuviese incluida en las cartas de comisión, que sin embargo, y como vemos, no era el caso de Francisco Luengo. En el conflicto surgido en Huete, el corregidor puso preso al regidor en la sala del ayuntamiento de la ciudad, decía el rey, que habiéndole quitado la subdelegación,

...diciendo que luego que tuvo intento de hacerla os había de haber ido a dar cuenta el subdelegado y otras palabras indecentes, y le habíais hecho causa y fulminado después de haberle preso, porque estaba ejerciendo, siendo así que le tocaba dar la noticia y requerir con la subdelegación cuando se le preguntase en virtud de que usaba respecto de haberse dado el uso al administrador, y habíais mandado que los escribanos de rentas y el de su comisión asistiesen a despachar ante vos como todo constaba por testimonio de que hizo presentación...

Ese “dar cuenta” hace referencia al acto de intimar una comisión, a la que de derecho estaba obligado todo juez comisionado, poniéndola en estos casos en conocimiento del corregidor, quien tenía la facultad de darle el uso o negárselo, si consideraba que no se ajustaba a derecho, o que no era pertinente. Ahora se trataba de una subdelegación.

No obstante la intimación fuese un requisito del derecho, los monarcas podían dar cartas de comisión en las que se prescindía de ella de forma expresa. Así aparece, por ejemplo, en una cédula de la reina gobernadora, fechada el 31 de mayo de 1669. Iba dirigida a Pedro de Encinas Osorio, con motivo del cobro del primero, segundo y tercero 1% que se debía ejecutar en la villa de Aranda de Duero. Por esta cédula se le daban al comisionado poderes ilimitados, en concreto, decía la cédula real *...os doy el poder y comisión necesaria en bastante forma sin reservación ni limitación alguna y con inhibición a todos y cualesquiera consejos, chancillerías y audiencias de estos reinos y señoríos...*, aquí la suficiencia legal del poder bastante se ponía a disposición de una potestad independiente y sin límite, para entregarle su aptitud legal. Precisaba la reina *sin que para ello sea necesario hacerla notoria a las justicias ordinarias de cada lugar por lo que importa la brevedad y secreto en las dichas diligencias, y que así conviene al real servicio, y es mi voluntad*. Podía este comisionado acompañarse de alguacil y escribano. Con semejantes poderes, medios y facultades este administrador comisionado adquiría una independencia plena del territorio. La cédula de la reina intenta prevenir el “embarazo” que podía plantear la jurisdicción ordinaria, con la tardanza que podía acarrear su expediente. Pero ese “embarazo”, y esa tardanza, no eran otra cosa que garantía. La necesidad del secreto podía efectivamente aconsejar que no se intimase una *commissio*. Lo que estaba ocurriendo es que sobre la base de un *mysterium iustitiae* o “religión del derecho”, vinculado a la ley y a la jurisdicción⁶, teniendo en cuenta el sistema de referencia del derecho extraordinario en el siglo XVII, se estaba omitiendo el mismo *ius*. La consecuencia era que con la hacienda, verdadero sujeto de excepción, con sus necesidades extremas, y con ese secreto, se amenazaban las garantías jurídicas de los súbditos. Circunstancia que no dejó impasible al corregidor de Aranda y Sepúlveda, Pedro Montero de Espinosa, quien se queja a la reina de que el dicho Pedro de Encinas estaba haciendo diligencias *...sin intimarla [la cédula] ni hacerla notoria al dicho corregidor...*, y añade,

⁵ RIPIA, J. de la: *Práctica de la Administración y Cobranza de las Rentas Reales, y Visita de los Ministros que se ocupan en ellas*, Madrid, 1676, p. 246.

⁶ KANTOROWICZ, E. H.: “Secretos de estado (un concepto absolutista y sus tardíos orígenes medievales)”, *Revista de Estudios Políticos*, n.º 104, marzo/abril, 1959, pp. 44 y 48.

Y respecto de que dicho don Pedro de Encinas iba procediendo atropelladamente, haciendo y proveyendo exabrupto[s] contra diferentes personas sin acuerdo de asesor gobernándose por su escribano que es pariente de dicho Luis Montero, que lo trajo de Valladolid para este negocio con pretexto de dicha instrucción secreta, de que se quejaron a dicho corregidor muchas personas proveyó auto para que dicho don Pedro de Encinas le entregase traslado de dicha cédula como se le había pedido antes y que se notificase a dicho escribano pareciese con los autos a hacer relación de ellos para reconocer si excedía de su comisión...⁷.

Proceder sin asesor –del que con frecuencia se servían los administradores y superintendentes, no siendo letrados, siendo imperitos y de capa y espada, aunque se consideraba existían limitaciones, como por ejemplo cuando la sentencia que se da sin él es justa, leve, notoria y sin duda⁸–, hacerlo con un escribano foráneo, y sobre todo hacer diligencias sin la notificación desarreglaba el derecho. Las consecuencias que ello tenía no solo afectaban a la autoridad, sino también a los súbditos. En efecto, si no se conocía la letra de la carta se impedía o dificultaba la activación de la vía de exceso por la jurisdicción ordinaria, principal garantía jurídica de los súbditos que los protegía de las extralimitaciones o exabruptos de los jueces de comisión –máxime si sus poderes eran ilimitados. El texto nos revela con claridad que la intimación no concernía solo a la autoridad, pues siendo una garantía del derecho afectaba también a los súbditos, a su protección legal.

Teniendo en cuenta estos ejemplos, y precedentes, es así como para el Consejo de Hacienda, en 1679, aquel dar cuenta al corregidor es visto como palabra indecente, no fiel cumplimiento del derecho; luego consideraba que sus ministros obraban con independencia, estaban dotados de una especie de superioridad sobre los demás ministros, pues no les concernían las garantías del derecho. Sin garantías esa *superioritas* que no reconocía la autoridad, atisbaba la compulsión, pues la intimación era contraria a ella. En este supuesto, el uso de la subdelegación no lo daría la jurisdicción ordinaria, sino el administrador. Para el corregidor, la subdelegación es considerada como una nueva comisión, distinta de la del administrador, que por tanto debía intimarse.

3. LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA COMMISSIO

La circunscripción llama a los límites legales de cada *iurisdictio*. Con el despacho del escribano de rentas y de la comisión Pedro de Herrera Ceballos podía interpretarse que había usurpado la *iurisdictio*. Es lo que piensa el Consejo de Hacienda. Para ello aprovecha la máxima según la cual *En que ninguno se entrometa en el oficio, que está a cargo de otro, consiste gran parte del buen gobierno de una Republica: y así está mandado por Derecho*⁹. Pero la intimación de una *commissio* no tenía como fin usurpar competencias, sino garantizar el cumplimiento del derecho, además de impedir precisamente esa usurpación

⁷ AHN, Consejos, leg. 25.881, caja 2.

⁸ CASTRO, A. de: “Por don Sebastián Antonio de Contreras y Mitarte... Respuesta a los cargos que se le han hecho en la visita” [posterior a 1648], BN (Biblioteca Nacional de España), Porcones, 244 (4), fol. 11r. Ello teniendo presente que, *Y no pudiendo nombrar asesores los administradores de millones... (sin permiso de V.M.) se ha de tener por de tolerancia el que hizo el dicho don Luis Moreno...*, “Señora. El licenciado don Julián de Cañas Ramírez y Silva, oidor de la Real Chancillería de Granada, dice...” [1665-1675], BN, Porcones, 64/17.

⁹ ENRÍQUEZ DE ZÚÑIGA, J.: *Consejos políticos y morales divididos en dos partes. Los de la primera tratan de la vida política en general. Los de la segunda de lo tocante al gobierno de un juez*, Madrid, 1663, fol. 194r.

por parte del comisionado, mantener su circunscripción jurisdiccional. La generalidad de la jurisdicción ordinaria se pone a disposición de esos fines, pues no impide el amojonamiento de la *iurisdictio*. Ahora, para Hacienda el sistema de referencia del administrador ocupa el todo de la jurisdicción ordinaria, su sistema de referencia detrae la generalidad que le es propia. Debido a que los administradores obraban en virtud de cartas de comisión, eran por tanto jueces comisionados, teniendo en cuenta que la jurisdicción ordinaria *...no tiene más diferencia de la delegada... sino ser la ordinaria para todas las causas...*¹⁰, el todo de la generalidad de hacienda venía a circunscribir la jurisdicción ordinaria. Desde la Edad Media existía la pesquisa general que solo podía ordenar el rey¹¹. Una pesquisa que era mal vista, e incluso considerada ilegal: *Hacer la pesquisa general, y vaga, fue grave culpa, y es prohibida, porque infama, y alborota los pueblos, y solo se hace contra facinerosos, y sediciosos...*¹². Es así que, la jurisdicción y los cometidos de los jueces comisionados eran normalmente limitados¹³, y estaban circunscritos por sus cartas de comisión. La ilimitación y la generalidad agredían por tanto estos principios, además de alborotar. La circunscripción determinaba que,

*con particular cuenta que los tales a quien se cometiére alguna cosa tocante a la jurisdicción, y ejercicio de la administración de justicia, no la ensanchen en más de lo que les fuere cometido, por lo que dice el Iuris Consulto Ulpiano, y otros... Y demás que entendido que siendo materia de comisión, y de mandato, no es lícito extender, ni traspasar un punto la tal comisión y mandamiento*¹⁴.

Pero, con los administradores generales llegaba una generalidad nueva y diversa, que perdurará hasta fin de siglo, y que se abrió camino en Castilla desde las primeras superintendencias de Olivares en los años 30¹⁵; la cual daba pie a aquellas extralimitaciones, como lo era no intimar una *commissio*. Al no hacerlo este subdelegado, la consecuencia inmediata era que, bien se entregaba a la hacienda la actualización del derecho, el mantenimiento de la legalidad, el orden y las garantías jurídicas, bien sus ministros procedían por encima de la ley y el derecho, sin comunicación con la *iurisdictio*, con ello, porque se negaba el *ius*, se vislumbraba un modo y una especie de existencia paralela reconocible como administración. El derecho pasa de ser el principio que ordena la comunidad, de ser instrumento de sus necesidades, de sus derechos e intereses, a ser instrumento de la hacienda, lo que significaba que se ponía a disposición de su búsqueda de rentabilidad fiscal, esa que es conceptualizada como *la granjería de la real hacienda*¹⁶. Con la *superioritas* de los administradores se infiltraba la preeminencia del derecho extraordinario frente al ordinario, con él la de un fisco

¹⁰ SALAS, F. de: "Por Juan Francisco Poirot, mercader de Lonja, vecino de esta corte, con don Francisco Fernández, guarda mayor del contrabando en ella" [posterior a 1648], BN, Porcones, 91/16, fol. 6r.

¹¹ PROCTER, E. S.: *El uso judicial de la pesquisa en León y Castilla (1157-1369)*, Granada, 1978, fols. 55 y 64.

¹² JORDÁN DE FUENTEMAYOR, B.: "Los motivos de la defensa, sucesos de las causas, excesos en formarlas, obligación por ellos a satisfacer, y excomunión, en que están incursos los que en ellas han intervenido" [posterior a febrero de 1648], BN, Porcones, 41 (16), fol. 10v.

¹³ CÉSPEDES, G.: "La visita como institución indiana", *Anuario de Estudios Americanos*, III, 1946, p. 9.

¹⁴ Cerdán Tallada, T.: *Veriloquium en reglas de estado según derecho divino, natural, canónico y civil, y leyes de Castilla...*, Valencia, 1604, pp. 122-123.

¹⁵ Cfr. HANOTAUX, G.: *Origines de l'institution des intendants des provinces d'après les documents inédits*, Paris, 1884, pp. 153-154. Vid. BERMEJO CABRERO, J. L.: "Superintendencias en la hacienda del antiguo régimen", *AHDE*, n.º 54, 1984, pp. 409-447.

¹⁶ El concepto lo menciona la Congregación de Clero en "La congregación de las santas iglesias y clero de Castilla y León dice: que vuestra majestad fue servido mandar publicar una ley y pragmática sanción dando nueva forma del papel sellado a los instrumentos, y demás actos judiciales, y extrajudiciales, su fecha en 15 de diciembre de 1636..." [posterior a 15 de diciembre de 1636], BN, VE, 208/53.

de excepción. En el Consejo de Hacienda se tiene una opinión diferente del derecho, pues lo restringe para que la administración ocupe su lugar, pero con una materia diferente. Había pedido el administrador, Francisco Luengo de Eguía, que el corregidor soltase libremente de la prisión al subdelegado, *...para que usase y ejerciese con la dicha subdelegación, sin que le pusiédeses embarazo alguno...* Pero, de nuevo, embarazar era garantizar el cumplimiento del derecho. No reconoce el sistema de referencia legal de la jurisdicción ordinaria, con ello no reconoce una garantía esencial del *ius*, pues se considera que el corregidor ha actuado de forma improcedente. La acción del subdelegado, sin circunscripción, se sale del orden judicial. Por la provisión el Consejo de Hacienda mandaba al corregidor soltase al preso libremente y sin costa alguna, para que pudiese hacer uso de su subdelegación, *...porque no cesase en el cobro de las dichas rentas...* El cobro puntual de las rentas se erige en una preeminencia que altera el derecho, su forma y tiempo, con su interpretación, sus reglas, sus límites, sus procedimientos. Finalmente, visto en el Consejo de Hacienda y Contaduría Mayor, se le ordena al corregidor, además de soltar al subdelegado de la prisión,

Y ejecutado así mando al dicho don Baltasar que presente ante vos el dicho mi corregidor la subdelegación referida que en él hizo el dicho don Francisco Luengo de Eguía, y vos el dicho mi corregidor le daréis luego el uso y cumplimiento de ella sin impedírselo ni embarazárselo por ningún motivo.

Se admite la necesidad de la intimación, pero sin dar la opción al corregidor de denegar, habiendo razón, causa o motivo, el uso de la *iurisdictio*, por lo que se despoja de su valor legal a este requisito del derecho, que deja de ser una garantía, para ser un mero formulismo vacío de su contenido legal. Hay apariencia de legalidad; se limita a ser una deferencia hacia la *auctoritas*, no es *rigore iuris*. Una garantía que no tiene consecuencias jurídicas deja de serlo. Despojada la intimación de su función, y al sobrepasar con ello los límites de la *iurisdictio*, se desata el derecho. Vemos a este corregidor actuando como supervisor de los administradores y sus subdelegados, hasta el punto de hacer causas y ponerlos presos, un hecho que por diversas causas no fue raro en los conflictos que se dieron entre superintendentes y corregidores con motivo de la reforma administrativa de la hacienda.

4. EL RIGOR DEL DERECHO

Con la defensa de la intimación estaba el cumplimiento del derecho, el *rigore iuris*, la misma legalidad. Al requerimiento y notificación, de 22 de noviembre, el corregidor de Huete contestó:

...dijo que la obedece con el respeto debido, y en cuanto a su cumplimiento carece de relación verdadera en decir que habiendo tenido su merced noticias de la subdelegación hecha en don Baltasar de Orozco le había puesto y tenía preso en la sala del ayuntamiento y quitado la subdelegación y tratándole con palabras indecentes y haberle hecho causa por razón de dicha subdelegación, porque lo cierto y la verdad es que estando su merced en la cama indispuerto, se le dio noticias de haber hecho ausencia de esta ciudad el señor don Francisco Luengo de Eguía, administrador de las rentas reales, y que estaba ejerciendo la administración el dicho don Baltasar de Orozco, y que había hecho autos sin haber intimado la subdelegación... y también el haber proveído otro auto de aprobación del repartimiento, que habiendo hecho los gremios sin haber hecho presentación de dicha subdelegación, por cuyo motivo les hizo cabeza de proceso y mandado prender (sin haberle visto la cara), como al presente lo está...

Los autos hechos por falta de jurisdicción son nulos *De tal manera, que no obran efecto alguno...*, y los procedimientos del juez no son jurídicos¹⁷. El corregidor no solo interviene mediante el acto de la intimación, sino que supervisa legalmente las actuaciones de los ministros de la hacienda, porque él es el garante del derecho en su territorio jurisdiccional. La finalidad es que no haya acción sin derecho. La contestación del corregidor, que sí adopta el *rigore iuris*, se ajusta a la fórmula del derecho *obedézcase pero no se cumpla*; respuesta que no es ni extrema, ni excepcional, se enmarca en la normalidad del derecho, en el funcionamiento ordinario y corriente de las instituciones, pues es el principio a partir del cual se dispone el derecho y el orden institucional, que comunica entre sí a la *iurisdictio*. Un sistema de referencia que da cobertura, que se repite invariablemente, a las actuaciones de los corregidores y justicias, ante la llegada de los administradores y superintendentes de la hacienda a las provincias y ciudades de Castilla. Conforme a aquella fórmula, Pedro de Herrera Ceballos señala que hay obrepción, porque la hay, a continuación obedeciendo y no cumpliendo, no hace otra cosa que aportar una mejor información en derecho, una relación verdadera, según el principio *ad melius informandum*. Teniendo en cuenta que, como defiende Gregorio Castellano, *...es principio seguro, y cierto, que los rescriptos, o facultades que se impetran del príncipe, no pueden valer, sino es que la narrativa de ellas, se ajuste a la verdad del hecho que se propone, porque alias, son ganadas con vicios de obrepción, y subrepción, y por el mismo hecho quedan inválidas, y como tales se deben retener...*¹⁸, conforme a ello, la carta del rey dada en Hacienda, es nula. La jurisdicción ordinaria del corregidor se muestra como garante de una *superioritas* del derecho que obliga a todos, incluidos los administradores y sus ministros, pero también al rey, porque, continúa Gregorio Castellano, *...si estuviera informado de la verdad, no expidiera semejantes rescriptos, ni facultades, y los manda retener, y que queden como si no se hubiesen dado*. La administración, ese principio nuevo al que se entregan los procedimientos de la hacienda¹⁹, no está sobre las leyes y el derecho. La jurisdicción ordinaria, porque representa la generalidad –se trata de la universalidad del derecho común– que abarca el todo en las ciudades, frente a la generalidad a la que se adscribe la administración de los superintendentes, es quien supervisa e interpreta la aplicación del *ius*, con sus imperativos, en las ciudades y lugares de Castilla. El corregidor de Málaga nos dice que *...es la ordinaria jurisdicción, por más necesaria, más favorecida, las demás en contraposición suya son odiosas, y por esta causa limitadas, y debajo de sus límites de casos y personas circumscriptas*; frente a la generalidad de la administración está un derecho que la circunscribe. A ello añade este corregidor que *Los jueces ordinarios fundan de derecho su jurisdicción, no con la indigencia de verificar como las demás jurisdicciones la tienen, y la calidad en que se fundan*²⁰. La intimación es una verificación de la jurisdicción del comisionado. Haciendo cabeza de proceso Pedro de Herrera Ceballos al subdelegado del administrador, porque su generalidad no tiene límite, no puede estar cometiendo una extra-

¹⁷ MONTERO, M.: “Pretensión del licenciado don Miguel Montero, abogado en los Consejos, y agente fiscal en el de Hacienda, y respuesta a los cargos que se le han hecho, por el señor don Martín de Larreátegui, caballero de la orden de Santiago, del Consejo de su majestad, y visitador del de Hacienda, y sus tribunales” [posterior a octubre de 1649], BN, Porcones, 220 (19), fol. 4v y 43r.

¹⁸ CASTELLANO, G.: “Por el real patrimonio... con la dicha villa de Madrid, sobre los agravios de las cuentas tomadas de las sisas reales, desde 1 de enero de 654, hasta fin de diciembre de 668” [1680], BN, Porcones, 26/11, fol. 9r.

¹⁹ MARCHAND, J.: *Un intendant sous Louis XIV. Étude sur l'administration de Lebreton en Provence*, Paris, 1889, pp. 46, 354. ANTOINE, M.: “Genèse de l'institution des intendants”, *Journal des Savants*, 1982, p. 314.

²⁰ “Discurso legal que funda la justicia de los procedimientos y sentencia pronunciada por don Diego Fernández de Córdoba Ponce de León, caballero del hábito de Calatrava, alférez mayor de la ciudad de Córdoba, corregidor y capitán a guerra de la de Málaga” [fechado por la BN entre 1617 y 1634], BN, VE, 23/4, fols. 19v-20r.

limitación. No hace otra cosa que someter el sistema de referencia de la hacienda, que es o debe ser circunscripto, no obstante la ilimitación y la generalidad, al mecanismo esencial de la intimación, con él al mismo derecho, su orden, sus principios, su diálogo, sus garantías. Todo ello es conforme a un *rigore iuris* que sujeta a derecho.

Que la exhibición o manifestación de una *commissio* era una garantía, se hace evidente en un documento en el que Rodrigo Jurado y Moya, fiscal en el Consejo de Hacienda y Junta de Millones, con motivo de una visita, defiende:

*Y cuando el dicho señor don Diego de Riaño hubiera tenido comisión para visitar algunos de los ministros de la Junta de Millones, era necesaria haberla mostrado, o hecho notoria, como hizo la del Consejo de Hacienda, y no se sabe que lo haya hecho, y así no se le pudo arraigar jurisdicción, ni puede usar de ella, porque esta manifestación de la comisión en materias de visita sirve en lugar de citación para los visitados*²¹.

La intimación o exhibición de una *commissio* no solo era garantía por sí misma, sino que ejercía como garantía de garantías. El delegado, estando en el mismo lugar donde cita, debía mostrar su comisión al citado, aunque se defiende, excepto si era conocido²². Por tanto, no se trata solo de la visita, porque en el orden judicial hay comunión jurídica, en cualquier circunstancia, si no se muestra la carta de comisión, no hay *iurisdictio*, no hay derecho, no hay obediencia. Obrar desarraigado y suelto es estar sobre las leyes, la pretensión recurrente de Hacienda; y si no interactúa con la intimación, su realidad es paralela, sin materia, sin derecho, abocando a aquella ausencia de efecto. A la justicia, no a la acción administrativa, tampoco a la ejecución que quiere emanar de ella, es a quien se entrega la aplicación del derecho, las acciones y actuaciones de todos los ministros. A este respecto, el corregidor no procede contra la persona, no hay inquina, le motiva el derecho, y el derecho es el que aplica. Se trata de *rigore iuris*. Porque había desafío de parte de Hacienda, alrededor de la activación de la intimación se está dirimiendo la observancia de la legalidad. No hay acción ni procedimiento sin interacción que la exceda.

5. EL ORDEN JUDICIAL Y POLÍTICO

Con la intimación se debatía además el orden del derecho, de las instituciones y ministros. Continúa el corregidor, en su respuesta de 22 de noviembre, argumentando que su proceder es conforme a derecho:

...y aunque caso negado sucediera el dicho señor don Francisco Luengo subdelegar, que no pudo conforme a derecho, por no dársele facultad para ello, debió el subdelegado intimar ante su merced, en que ha cometido delito contra la jurisdicción real, pues ninguno puede usar de jurisdicción ninguna sin intimar, mediante lo cual no ha lugar a su soltura, porque el conocimiento de la causa toca a su merced como corregidor y a su majestad y señores de su Real Consejo y de su Real Chancillería, demás que al dicho don Baltasar de Orozco su

²¹ “Por el doctor don Rodrigo Jurado y Moya, caballero de la orden de Santiago del Consejo de su majestad, y su fiscal en el Real de Hacienda, y de la Junta de Millones, satisfaciendo a los cargos que han resultado contra el de la visita del Consejo de Hacienda que está haciendo el señor don Diego de Riaño y Gamboa...” [posterior a 1642], BN, Porcones, 220 (16), fol. 2v.

²² ROZADO, J. A.: “Discurso canónico legal, real y político, por don Juan Vicencio Vivaldo, caballero de la orden de Santiago, alguacil mayor de la Real Chancillería de Granada, y alguaciles y ministros de ella en el pleito con el fiscal eclesiástico de este arzobispado”, Granada, 1656, BN, Porcones, 28/23, fol. 16v.

merced le tiene preso por débitos que debe al pósito de esta ciudad, en que está procediendo en virtud de real provisión de su majestad y señores de su Real Consejo de Castilla.

El corregidor conoce la carta de comisión del administrador, por lo que había sido intimada, no todo era desafío del derecho. Como hemos apuntado, normalmente se incluía en las cartas de comisión de estos administradores la facultad de subdelegar. Esta facultad debía ser expresa, no podía presumirse. El corregidor aprovecha esta circunstancia, si bien omitiendo la facultad –era posterior–, concedida por el gobernador de Hacienda. Según ello, la carta de comisión es determinante. En cualquier caso, el acto de la intimación obliga también al subdelegado. Si no se da el uso carece de jurisdicción, queda como persona particular; al proceder sin haber intimado, es cuando ha cometido delito contra la jurisdicción real, por lo que también hay, esta vez sí, usurpación de la *iurisdictio*, desordenando el derecho. Teniendo en cuenta que *No hay cosa más odiosa en el derecho que el despojo; y así manda con toda celeridad restituir al despojado; a lo que se añade, Y no solo despoja el que con violencia quita a otro la hacienda, y posesión, sino también el juez que procede sin guardar el orden de derecho*²³. Usurpar la jurisdicción es pervertir el *ius*. El orden del derecho determina y vertebró la vida comunitaria, todo salvaguardado por la *iurisdictio*, con sus procedimientos y garantías, no la administración como sujeto distinto y suelto. Si el rey es quien concede jurisdicción, su representante, la jurisdicción ordinaria, conforme a derecho, debe autorizarla para que los ministros no actúen sin arraigo legal. Si la *commissio* es legal, y no pueden los justicias ilegítimarla de por sí, porque también es conforme a derecho, el uso de su jurisdicción depende de un requisito como la intimación, esta prerrogativa no puede atribuirse a un administrador o superintendente, porque ello desarregla el *ius* con su fuerza de constitución.

La intimación era común a todas las jurisdicciones, pues asimismo se puede ilegítimar la absolución de una excomunión en territorio ajeno, teniendo en cuenta que, *...nada miraron las leyes con más cuidado que el que se le guardase a cada territorio su jurisdicción...*, y que *...el juez fuera de su territorio no tiene jurisdicción...*, sin haber exhibido ante el metropolitano de la ciudad, era el caso de Baza, *...comisión, requisitoria, ni otro recado...*, *...y que se pretenda después que esto no es contravenir al orden eclesiástico, y perturbar la jurisdicción, y exención de que goza el territorio de Baza por la concordia, no se puede ajustar en buena jurisprudencia*²⁴. A ello añade, *Y con todo eso por ser acto, y ejecución de derecho, y precepto dado en otro tribunal no se puede ejecutar en territorio ajeno sin letras requisitorias por la conservación de las jurisdicciones, y porque no se confunda el orden judicial, y político...*; así la absolución emanada de Granada hecha sin requisitoria *... fue nula por defecto de guardar el orden del derecho y práctica*²⁵. Y concluye en cuanto al comisionado, lo era fray Tomás de Arroyo: *Y habiendo aceptado la comisión, no pudo en este territorio usar de ella, aunque fuese de quien la pudiese dar para que surtiese efecto en él, sin exhibirla, y presentarla ante el ordinario de Baza...*²⁶. En cada caso, con la intimación o exhibición de las comisiones estaba en juego la defensa de la jurisdicción, pero no como un acto exclusivo, al contrario era común, implicaba a todos, pues con él se debatía la conservación del orden legal y político, el amojonamiento de la *iurisdictio*, con su diversidad, el mantenimiento de la libertad y la independencia del territorio. No era un

²³ MONTERO, M.: *op. cit.*, fol. 2v.

²⁴ “Caso. Por causa criminal de haber impuesto manos violentas en unos clérigos el corregidor de Guadix...” [siglo xviii], BN, Porcones, 736 (21), fols. 1v y 6r.

²⁵ *Ibidem*, fol. 9r.

²⁶ *Ibidem*, fol. 10v.

acto parcial el que se estaba debatiendo en Huete, sino general del reino. Y es que nos dice nuestro interlocutor, asimismo se contravenía el derecho común y municipal²⁷. La intimación era por tanto expresión de una comunión jurídica que implicaba a todos, a todo derecho, sus reglas, principios, su orden, a la comunidad misma. Debido a que la *iurisdictio* disfruta de soberanía, que la transmite a cada ciudad o reino, el derecho, representado en estos casos por la exhibición de una *commissio*, es el único instrumento que puede comunicar y poner en relación un orden caracterizado por la división de la *potestas*. Gustave Lanctot, afirmó en su día, que en el dominio de las finanzas la autoridad del intendente *...régnait souveraine*²⁸. Con la llegada de estos ministros se producía el choque de dos generalidades soberanas, pero bien distintas. La del corregidor conservaba o ajustaba el derecho, con su orden, la del superintendente o administrador los agredía, o destruía. Si no hay intimación o exhibición, no está el *ius*, no hay ajuste ni comunicación posible, sin requerimiento no hay ni procedimiento legal, ni hay ejecución posible. Por lo que con los jueces de comisión –las disputas que se dieron entre justicias y administradores de la hacienda, sus delegados, y ministros–, no era una mera cuestión de autoridad la que se debatía, tampoco lo era la que concierne al acto de la intimación, pues ahora no vemos que se niegue de por sí esa *auctoritas*, sino un problema jurídico y legal, que atañía al ordenamiento de la vida comunitaria, el orden judicial y político, la misma conformación de la monarquía.

6. DENEGAR EL USO DE UNA COMMISSIO Y LOS RECURSOS DEL DERECHO

Jerónimo Fernández de Herrera Villarroel recuerda, unos años antes del conflicto de Huete,

...no ser legal, pues los jueces ordinarios, o de comisión (como en este caso lo son los ministros) a quien no se haya dado el uso de su comisión por el ordinario del territorio donde vive, o se entró el reo, no pueden entrar en él a hacer actos de jurisdicción, y aquel género de jueces no entran sin despachar requisitoria para este efecto, conforme una ley de Partida (l. 7, tít. 4, part. 2).

Y los despachos deben presentarse ante el juez del territorio, para que tenga efecto la diligencia, por la disposición de otra ley de Partida (l. 1, tít. 29, part. 7) y las requisitorias de este género, las debe cumplir sin embarazo el juez del territorio, pudiendo ser habido el reo²⁹,

Lo dice la doctrina, lo dicen los protagonistas en un verdadero debate legal, y lo ponen en práctica los ministros. Sin requisitoria, sin exhibición de la *commissio* el juez o ministro carece de jurisdicción. No obstante lo que puntualiza a continuación Jerónimo Fernández de Herrera, en la práctica legal la requisitoria implicaba al juez, lejos de obligarle a cumplir con el requerimiento llanamente y sin embarazo, de forma pasiva, habilitaba la activación de su propia *iurisdictio*, con su eventual protesta jurídica, con la consiguiente posibilidad de denegar el uso de la jurisdicción, porque ese “embarazo”, tan repetido en la documentación, tenía una lectura legal, pues era garantía del mismo derecho, pues habilitaba sus distintos recursos. Su papel era por tanto activo. Una requisitoria podía ser *...nula, no justificada*,

²⁷ *Ibidem*, fol. 6r.

²⁸ *Op. cit.*, p. 84.

²⁹ FERNÁNDEZ DE HERRERA VILLARROEL, J.: *Práctica criminal. Instrucción útil de sustanciar las causas, con distinción de lo que particularmente parece se debe observar, así en los Consejos y sala, como en otros tribunales superiores, y en los inferiores de jueces pesquisidores, y ordinarios, por los escribanos a quienes suelen cometerse, en que se notan muchas de las dificultades que se ofrecen en el todo, y en parte de ellas*, Madrid, 1672, p. 51.

*diminuta...; quitándole ...justamente el efecto de poderse ejecutar*³⁰. La exhibición se nos manifiesta en Huete como un requisito del derecho y como una garantía jurídica. No lo piensan solo los ministros.

El propio rey, en este caso Felipe IV, lo confirmaba en una cédula de 5 de mayo de 1644. Mencionaba el monarca que los arrendadores de la sal, soleimán, azogue, tabaco, naipes, y otras cosas, así como los estancos de este género, solían enviar visitadores que discurrían por el reino para averiguar si habían entrado con registro los géneros que les pertenecían. Debido a que hacían graves molestias a los vasallos, *...porque si bien estos comisarios van a costa de los arrendadores, por excusárselas, y por su granjería hacen muchas denunciaciones y causas injustas a los vecinos, haciéndose contribuir por evitarlas...*, continúa el rey,

*y para impedir estos daños, mando que las justicias ordinarias, cada una en su jurisdicción, obliguen a los dichos visitadores, o comisarios a que exhiban las comisiones, y no les permitan usar de ellas, sino es en los casos, y cosas que justificadamente debieren. Y si cometieren exceso, no se lo permitan, y den cuenta al mi Consejo de Hacienda, y Comisión de Millones, para que lo remedie y castigue*³¹.

También establecía la cédula de 1644 que ningún tribunal, corregidor, justicia, ni administrador, arrendador, tesorero o receptor de las rentas reales podía enviar más de un ejecutor, aunque fuera por diferentes servicios o deudas, *y lo contrario haciendo, las justicias ordinarias puedan impedir el uso de dichas comisiones, y no se paguen salarios, y den cuenta a los del mi Consejo, para que provean lo que más convenga*³². Al lado del acto de la intimación, que el rey confirma, hemos visto que estaba otra garantía jurídica que atañía al súbdito, pero también a la autoridad, el exceso de comisión que toca por oficio atender a la jurisdicción ordinaria, que aboca a los vicios de nulidad y atentado³³. También para Felipe IV, se exhibe la *commissio* para comprobar si se ajusta a derecho, para supervisar el ejercicio del juez, sus límites, y prevenir el eventual exceso de comisión, la extensión de la *iurisdictio*, la extralimitación. Había que prevenir, pero también se trataba de activar en caso necesario los procedimientos legales. De nuevo se mostraba la garantía de garantías. Si *...como dijo el rey don Alonso: El poderío de los delegados no puede ser mayor de cuanto les fuere otorgado por carta, o por palabra del rey, o de los otros sus mayores*³⁴, lo cierto es que esa carta, con sus fórmulas, es la que determina sus tareas. En efecto, el juez delegado *...cuya jurisdicción es de estrecha*

³⁰ “Por la jurisdicción real y el licenciado don Juan Pérez de Lara, fiscal de su majestad en esta Real Chancillería, en el pleito de inmunidad de Iglesia que pretendía Francisco Alcalde, de quien se ha hecho justicia...”, Granada, 13 de septiembre de 1639, BN, Porcones, 736(7), fols. 7v y 5v.

³¹ Está inserta esta cédula de 1644 en: “Cédula en que su majestad manda guardar, cumplir, y ejecutar la forma que se ha de tener en la cobranza de las rentas reales, y la satisfacción que por ello se les ha de dar a las justicias, y cómo se han de despachar ejecutores, y del uso de ellos”, Madrid, 25 de febrero de 1647, BN, VE, 41/44, fol. 3v.

³² *Ibidem*, fols. 4v-5r.

³³ ALCANTUD, J. de: “Por el concejo, justicia, y regimiento de la villa de Villa-Viciosa, que es del real patrimonio, cuyo derecho coadyuva el señor fiscal del Real Consejo de Hacienda, con la villa de Brihuega, y la dignidad arzobispal de Toledo, cuya es la dicha villa, que ha salido a este pleito, coadyuvando su derecho, sobre nulidad, y atentado de los autos que hizo el licenciado don Manuel de Olivares, que renovó la mojonera antigua de Villa-Viciosa, en virtud de comisión despachada por el Consejo de Hacienda” [posterior a 1667], BN, R/22619 (3), fol. 15v.

³⁴ BAZÁN, J. C.: “El contador don Nicolás de Robledo, en el juicio de visita, manifiesta el inculpado procedimiento del conde de Molina de Herrera (que está en el cielo) que fue de los Consejos de Guerra, y Hacienda de su majestad, asistente y maestro de campo general de esta ciudad de Sevilla, y su tierra, superintendente general de las rentas reales de ella, y su tesorería, y responde a los cargos que se le han hecho como contador de la superintendencia, y demás encargos del conde, y como su secretario” [posterior a enero de 1665], BN, Porcones, 110 (34), fol. 6v.

naturaleza, y no es capaz de prorrogarse, ni extenderse a más de lo que contiene la letra de la comisión³⁵. Los administradores y superintendentes eran jueces comisionados que procedían a partir de sus cartas, también conforme a diversas instrucciones. La intimación aseguraba el conocimiento de la “letra” de cada carta, unas veces homogénea, otras sujeta a variación, así en sus fórmulas, como en sus competencias, y poder así impedir de forma activa la extensión, porque *Y todo lo que el juez delegado obra excediendo de su comisión, es nulo, y de ningún valor, y efecto*³⁶. La variación de las fórmulas de las cartas hacía que no se pudiese prescindir de la intimación. Ambos procedimientos, la intimación y la vía de exceso, garantizan el ejercicio de la *iurisdictio* que, a su vez, era guardián de una legalidad que protegía a los súbditos. La hacienda no era, y no debía serlo, una excepción legal. Todo ello por voluntad real. Por tanto, si no se intima, con la eventualidad de denegar el uso, ya hay extralimitación, se infiltra la ilimitación de la hacienda, con la amenaza de que su *potestas* sea *absoluta*, contra derecho, o *económica*, sin derecho. Negar el uso de una *commissio* de la hacienda era un acto legal, que podían admitir las propias instituciones de Hacienda, competencia inalienable de la jurisdicción ordinaria, reconocido e inducido por los monarcas, no solo por razones jurídicas, sino además habiendo causa y motivo, lo cual ampliaba sus efectos.

Uno de los problemas que planteaba la intimación, es que era frecuente que se entretuviese el uso de las comisiones de los superintendentes, o de sus ministros. Así nos lo dice, por ejemplo, Sevilla, en un papel durante el reinado de Felipe IV³⁷. Podía haber malicia, como hace ver la ciudad hispalense ocurrió en la villa de Las Cabezas, que apenas había sido vendida, la justicia puesta por quien la compró, se había opuesto a lo mandado por el conde de Valdeláguila superintendente general de las rentas reales, incluso tumultuándose contra los ministros que envió, *...entreteniéndole el uso de su comisión...* Se puede denegar o entretener el uso, porque ese uso lo dan los justicias. Retardar el uso puede desatar una *commissio*, en esta ocasión sucedía que *...mientras, transportaban los fraudes, y no permitiendo poner cobro a los aprehendidos*. Este era el problema con el que se enfrentaba la hacienda. Ello no se podía resolver dañando el derecho, porque habiendo causa y motivo, empatar una *commissio* era legal y necesario. Negar el uso para dar cuenta al Consejo es lo que hizo nuestro corregidor, Pedro de Herrera Ceballos. Ello se enmarcaba en la normalidad del funcionamiento de las instituciones. Ahora se trataba de que esa normalidad siguiese siéndolo, y no fuese sobrepasada por un derecho de excepción.

En Huete, seguimos con su respuesta de 22 de noviembre, el corregidor señala que también había obrepción, es decir, relación siniestra, en el hecho de que el subdelegado, Baltasar de Orozco, *...en cuanto a decir el dicho don Francisco Luengo de Eguía ser muy al propósito el dicho don Baltasar de Orozco para dicha subdelegación es asimismo siniestro...*, relatando a este efecto una serie de torpezas e irregularidades de este regidor. En concreto, sostiene que Baltasar de Orozco ha sido comisario de la carne,

...de esta ciudad desde el día de San Juan de junio de 1675, hasta el de 1676, y importando la sisa y alcabala y cientos regularmente por trece o catorce mil reales, solo ha pagado 1.300 reales, y aunque pretende haber cumplido por decir se perdió las dichas rentas, es cierto que pidiéndose a la ciudad por razón del encabezamiento, se ha de defender diciendo lo debe pagar el dicho don Baltasar de Orozco y su compañero...

³⁵ “El doctor don Francisco Marín Rodezno, caballero de la orden de Calatrava, presidente de la Real Chancillería de Granada, dice...” [posterior a 1661], BN, Porcones, 901 (21), fol. 12v.

³⁶ *Ibidem*, fol. 12v.

³⁷ “Señor. No siendo extraño en los monarcas a la memoria, así las proezas de sus reales progenitores, como los servicios de sus vasallos. Sevilla con su grande antigüedad en todo...” [posterior a 1630], BN, Porcones, 36/13.

El corregidor estaba con su jurisdicción representando efectivamente a la ciudad. El desatino del ministro del administrador, no llega Pedro de Herrera Ceballos a denunciar que sea fraude, siendo mala administración, tiene remedio. Así, inmediatamente pasa a hacer una sugerencia:

...y hablando con el respecto que su merced debe, no sabe que haya ninguno más a propósito para la administrar las rentas reales que los corregidores de su majestad, sin embargo, porque no se presume que su merced pretende administración ni subdelegación, no obstante las causas referidas, y que es contra el servicio de su majestad, mando que el dicho don Baltasar de Orozco use de subdelegación...

Hay *rigore iuris* en los procedimientos del corregidor, pero a su lado hay también una reivindicación secular del reino frente al avance de la reforma administrativa de la hacienda: que los corregidores sean los administradores de las rentas, no ministros independientes y sueltos, con un sistema de referencia administrativo paralelo, que sobresale y sobrepuja, desligado de la *iurisdictio*, de su amojonamiento, del mismo derecho. Esa reivindicación determinaba el uso de la *commissio*: suponía incorporar el sistema de referencia legal de la hacienda, y con ella su acción administrativa, a la *iurisdictio*, garantizando su sometimiento a derecho, a sus recursos y garantías, acabando con la doble generalidad incompatible: la de la jurisdicción ordinaria y la del superintendente administrador. Por lo que no se trataba, en efecto, de mera emulación lo que se debatía en este ejemplo, como en los demás enfrentamientos que proliferaron por Castilla, sino sobre todo de una cuestión legal que implicaba a la misma monarquía. No había un ansia de acumular competencias, sino de defender y garantizar el fiel cumplimiento del derecho, que con la hacienda no se infiltrase una administración de excepción, sin ley ni derecho. Mantener el acto de la intimación en pleno vigor ejercía así como garantía jurídica de los súbditos, y del reino, su *auxilium* de naturaleza contractual, frente a una hacienda de extrema necesidad que quiere compeler a los súbditos, adscrita al derecho extraordinario. Es así como finalmente, a pesar de lo que decía la provisión del rey de 18 de noviembre, no se “usurpa” la subdelegación, sino que se desencadenan los instrumentos y medios legales. Estos son los que cobran todo el protagonismo, y los que se quieren preservar, que no pierdan su fuerza, su validez legal.

Pedro de Herrera Ceballos tiene la convicción de que procede conforme a derecho. Así, termina su respuesta apuntando que:

...y para que conste ser cierta la relación que su merced hace manda a Manuel de Ceza, escribano del número y ayuntamiento de esta ciudad, dé testimonio a continuación de esta respuesta, de cómo es cierto el haber hecho causa al dicho don Baltasar de Orozco por haber proveído autos sin haber intimado la subdelegación, que se refiere en la real provisión. Y asimismo Diego Belmonte, escribano de rentas reales y del número y ayuntamiento, de cómo su merced está procediendo contra el dicho don Baltasar de Orozco por la deuda de dicho pósito, y en virtud de provisión de su majestad y señores de su Real Consejo, y también que le tiene preso por esta causa, y esto dio por su respuesta...

Las razones del corregidor son estrictamente legales. Este ministro busca en el *ius* y en el propio sistema de referencia, el de la jurisdicción ordinaria, la defensa de una ejecución sujeta a derecho, la única posible. La intimación garantizaba que la ejecución de los ministros de hacienda no obrase sin derecho. Con la intimación se defiende una ejecución general, conforme a derecho común, opuesta a la generalidad de la de la hacienda que no puede abrirse camino de por sí. Lo expone Pedro de Herrera Ceballos abiertamente: no intimar una *commissio* y pasar a ejercer jurisdicción sin haberlo hecho antes es manifiestamente contra derecho. En la denegación del uso no hay interpretación, o distintas probabilidades legales susceptibles de ser

ejecutadas, sino un hecho notorio que determina con claridad el derecho. A partir de aquí, si el ministro comisionado no obedece, actuar y proceder de forma activa con los instrumentos del derecho es legal y necesario.

7. LA ACTUALIZACIÓN DEL DERECHO Y LA VIDA COMUNITARIA

Se trata del derecho, pero asimismo de las implicaciones que su aplicación tenía, en el fisco, como citaba antes el corregidor, pero también en la vida comunitaria. Así, a todo lo visto se une no haber ejercido el subdelegado regidor correctamente su oficio, en una cuestión de policía que toca por oficio supervisar a los magistrados, insistiendo en la deuda del pósito. A este respecto, está difundida la idea de que,

*De ordinario hay tan mala administración en los pósitos que se trata como hacienda de comunidad: y así no luce, solo sirve de que el que los administra, gane, o las justicias y mandones se socorran de ellos. Las cuentas se toman tarde, y mal, y cada día ay delaciones y quejas en el Consejo, de que pósitos que tenían dos mil, y cuatro mil hanegas, y tanto en dinero, no tienen nada*³⁸.

El corregidor se distancia de esos malos justicias, y se erige en fiel vigilante de una realidad cotidiana de la que tenía constancia el Consejo de Castilla. Se manifiesta el celo de un buen ministro, fiel servidor del rey, pero también se trata de la actualización del derecho que se muestra como el instrumento que permite supervisar y remediar la mala administración o los males que se dan alrededor de los pósitos, con ello el bien de la comunidad. Además, el corregidor ha actuado según pautas perfectamente legales, que se pueden verificar en todo momento. Hay buena fe, y este justicia ni ha actuado a su modo, ni lo ha hecho de forma precipitada, por odio o enemistad, tampoco ocultamente. En todo momento ha activado procedimientos legales. Con ellos está un sosiego del derecho que apacigua la vida comunitaria. Además hay por su parte celo del bien común, que no puede sobrepujar la hacienda por imperiosa que sea su *necessitas*. Hay por tanto servicio público. Con esta ocasión deja ver sus cualidades de buen ministro y recto juez. Pero sobre todo no hay proceder desprovisto de supervisión, es la vigilancia del *ius* que vela por el bien común y por la comunidad, sus intereses, sus necesidades.

En el expediente está el testimonio, con fecha 22 de noviembre, del escribano real, perpetuo del número y de comisiones, de Huete, Manuel de Ceza, en el cual confirma que la causa de la prisión de Baltasar de Orozco es por haber usado de una subdelegación para que ejerciese oficio de administrador, hecha por Francisco Luengo de Eguía, el administrador titular, y haber despachado mandamiento para cobrar distintas cantidades de maravedís pertenecientes a la real hacienda, ...y otro ajuste hecho por los gremios de joyería de esta ciudad, firmado uno y otro del dicho don Baltasar de Orozco y Diego Belmonte, la cual dicha subdelegación hasta hoy no consta se haya presentado ante dicho señor corregidor ni su merced dado cumplimiento por la razón referida de no haberse presentado antes de hacer autos. No se puede escriturar, proceder, ni acomodar el comercio, la *económica adquisitiva* de la ciudad de Huete, entendida además de como república, como cuerpo y casa³⁹, a cuyo

³⁸ *Advertencias del estado en que están el patrimonio real y el reino, y de los medios por donde se podría tratar de su reparo* [1622?], RAH (Real Academia de la Historia), 11/9385 (409), fol. 38r.

³⁹ PÉREZ DE MONTALBÁN, J.: "Discurso de la filosofía en común, y en particular", en *Para todos los ejemplos morales humanos y divinos en que se tratan diversas ciencias materias y facultades repartidos en los siete*

servicio estaba la *iurisdictio*, con una *potestad económica* sin derecho. Con el debate de la intimación se está dirimiendo el ordenamiento de la vida comunitaria, el que concierne a sus actividades, el desenvolvimiento de los tratos y el beneficio de los súbditos. La garantía del derecho se ponía a su disposición. Derecho y comunidad no podían separarse. El ajuste fiscal con el comercio, ese instrumento de acomodamiento entre las partes al que acudieron tantos administradores, no podía substraerse al derecho. No lo dice solo el corregidor, el hecho es que no hay fe pública de la intimación de la *commissio*. Se trata de un argumento que se sostiene a sí mismo. Al fundamentarse en la ausencia de instrumento público, lo hace en los hechos.

A continuación está el testimonio de Diego Belmonte, también escribano público y perpetuo del número, escribano mayor de rentas, según el cual el juez de residencia Fernando de Herrera Vacas, en la residencia que tomó al corregidor Jacinto Fernández de San Salvador, había mandado a Baltasar de Orozco, y a otro regidor, Juan de Salcedo Amoraga,

...volviesen y restituyesen al pósito y alhorí de ella los 6.000 reales de vellón que percibieron de su caudal, y que estuviesen al riesgo cada uno de por sí de toda la cantidad por entero, y a que en la misma conformidad pagasen los intereses de los dichos 6.000 reales a razón de 5% hecha la cuenta desde el día que los recibieron hasta el de la restitución...

Sentencias que fueron confirmadas por una provisión real del Consejo de Castilla, ...y se mandó que el señor licenciado don Pedro de Herrera Ceballos, corregidor de esta ciudad y su tierra por su majestad, las cumplierse y ejecutase, y por auto proveído ante mí por dicho señor corregidor se mandó prender al dicho don Baltasar de Orozco y poner dos guardas en las casas de su morada, y con efecto se le pusieron... Ahora sí hay instrumentos públicos y hay forma judicial, no ha habido atentado por parte del corregidor de Huete. Gracias al derecho el corregidor no solo supervisa, sino que interviene en las actuaciones de cualesquiera ministros, con los instrumentos que le concede el derecho, y porque una *commissio* no suspende la *iurisdictio* en lo que es competente, los ministros de la hacienda no debían disfrutar de una excepción legal. La hacienda y la comunidad no podían comunicarse sin la mediación del derecho.

A partir de este momento el problema que se plantea es estrictamente legal. Si se reconoce que la intimación de las comisiones es conforme a derecho, como lo era —el propio administrador había cumplido con este requerimiento—, su negación supondría limitar el *ius*, negar sus garantías, las que atañen al cumplimiento del derecho, pues si se intiman las comisiones es para que no haya extralimitación e impedir la usurpación de la *iurisdictio*, para que frente a la generalidad, el límite jurisdiccional sea un hecho. En caso contrario el *ius* podría ser quebrantado. Ahora se trataba de que, si ese control garantiza la sujeción de los ministros comisionados a derecho, lo haga para que sea este último el que regule y ordene la vida comunitaria en cualquier materia y circunstancia. Con la defensa de la intimación se está defendiendo, por tanto, la conservación del amojonamiento de la *iurisdictio*, porque ella ordena y protege la vida de los súbditos, sus actividades, sus intereses, con él la variedad de jueces, que ejerce como garantía jurídica de todos los súbditos, frente a la nueva ilimitación desligada, unívoca de una hacienda *absoluta* que quiere abarcar el todo en las provincias, incluida su riqueza y *economía*.

días de la semana y dirigidos a diferentes personas, Huesca, 1633, p. 31. Vid. BRUNNER, O.: "La 'casa grande' y la 'oeconómica' de la vieja Europa", *Prismas. Revista de Historia Intelectual*, n.º 14, 2010, pp. 117-136.

8. LA DESOBEDIENCIA JURÍDICA

El componente vital de la intimación era la desobediencia jurídica. La respuesta del rey fue dar una sobrecarta el 29 de noviembre, que incluía la carta del día 18. Expedida por el Consejo de Hacienda y Contaduría Mayor, en ella menciona Carlos II, que el corregidor, si obedeció esta carta, y la cumplió, en cuanto a poner en uso la subdelegación; pero no lo hizo en cuanto a soltarle de la prisión, dice el monarca en esta sobrecarta, *...por no haberos hecho notoria la subdelegación para usar de ella...*, ello *...fundado en decir que también está preso en virtud de otra despachada por mi Consejo de Castilla sobre la cobranza de lo que está debiendo al pósito de esa ciudad, y en otro motivo que vuestra respuesta refiere y consta por los testimonios a ella adjuntos...* Por esta sobrecarta se manda a Pedro de Herrera Ceballos guardar y cumplir la carta anterior, *...siendo la soltura por lo que mira a la causa de no haber presentado ante vos la dicha subdelegación que en él hizo el dicho don Francisco Luengo para usar de ella, y por lo demás que toca al dicho mi Consejo, que así es mi voluntad...* Para Hacienda no intimar una *commissio* es una circunstancia legal ordinaria. Con ello la excepción se normalizaría.

Notificada la sobrecarta a Pedro de Herrera Ceballos, su respuesta, fechada el 2 de diciembre, fue de nuevo estrictamente jurídica, pues *...la obedeció con el respeto debido...*,

...y en cuanto a su cumplimiento vuelve a representar a su majestad y señores de su Real Consejo de Hacienda, tocarle el conocimiento de la causa como corregidor, y a su majestad y señores de su Real Consejo de Castilla y de su Real Chancillería por ser causa de quebrantamiento de la jurisdicción real, cuyo delito cometió don Baltasar de Orozco, subdelegado, en no haber presentado la subdelegación antes de ejercer acto de jurisdicción ninguno, y pidiendo ante su merced, está presto a obrar conforme a derecho demás que todavía le tiene preso por la causa de estar debiendo al pósito...

Se ajusta el corregidor a la fórmula *obedézcase pero no se cumpla*, a la representación jurídica, aportando la mayor información en derecho, *ad melius informandum*, procedimientos legales todos consubstanciales a la autoridad. Teniendo en cuenta que la jurisdicción ordinaria *...es aquella, que se concede inmediatamente por el Príncipe, o por la Ley...*⁴⁰, con el quebrantamiento de la jurisdicción real se desafía al rey mismo, además de a la ley y al derecho. Hay por tanto, subversión legal. Finaliza el corregidor, formulando otra garantía que estaba tanto a disposición de los súbditos como de la autoridad, y que también se utilizó para contravenir, la súplica,

...y así suplica a su majestad y dichos señores se sirvan de sobreseer en el conocimiento de ambas causas por tocar a su majestad y dichos señores de su Real Consejo de Castilla, como lleva referido, y de lo contrario hablando con el respeto debido, protesta dar cuenta a su majestad y dichos señores de Castilla y al señor fiscal para que se forme competencia sobre a quién toca el conocimiento de dichas causas, y esto dio por su respuesta...

La súplica, que tiene *...la misma calidad y naturaleza...* que la apelación, se pone ante el magistrado superior, y por ella *...se le informa mejor, o se hacen nuevas defensas, y mediante ellas, él mismo revoca su primer dictamen*⁴¹. El principio *ad melius informandum* y la defensa para revocar una sentencia o, como en este ejemplo, también para sobreseer en el conocimiento. Se suplica y se desobedece, porque *Nuestras leyes reales (conformándose*

⁴⁰ VEITIA LINAGE, J. de: *Norte de contratación de las Indias Occidentales*, Sevilla, 1672, p. 10.

⁴¹ MARÍN RODEZNO, F.: *op. cit.*, fol. 6v.

con las del derecho común) disponen, que cuando se manda alguna cosa contra derecho, se suplique; ello incluso para quien defiende a continuación, para apoyar su pretensión, Pero habiendo representado el inconveniente, debe obedecer a la segunda; aunque se le puede poner la objeción, no cuando lo que se manda es contra las leyes y es injusto⁴². La súplica se puede combinar con otro remedio y recurso del derecho, la competencia jurisdiccional, a la que acude el corregidor de Huete; ambas se erigen en garantía del orden jurídico, de su esencia, la desobligación, así como de cada uno de los procedimientos legales y de la constitución de la autoridad. En cada caso hay una garantía a disposición de una autoridad que personifica el derecho. Esa personificación es la que se manifiesta con toda su fuerza en Huete, como en todo el reino, con motivo de la reforma administrativa de la hacienda. Si el corregidor es el guardián de un territorio jurisdiccional independiente, de su libertad, no por ello está desvinculado de la corte, pues el Consejo de Castilla es su principal custodio, su amparo legal. El derecho provee independencia y libertad, pero ese mismo derecho también une. Por lo que la libertad que provee el *ius* son los que vinculan y cohesionan. Con sus reiteradas desobediencias, no hay rebeldía por parte de Pedro de Herrera Ceballos, sino observancia estricta del derecho. Obedecer, no cumplir y suplicar para desencadenar otra garantía del derecho que también estaba a disposición indistintamente de los súbditos y de la *auctoritas*: la competencia jurisdiccional. Instrumentos todos que llaman a la desobligación o ausencia de compulsión, que son el fundamento del orden jurídico, y que habilitan a la vez que articulan la intervención del corregidor de Huete. Por consiguiente, se intima una *commissio* no para obligar al juez a su acatamiento, su función legal es, al contrario, garantizar la desobediencia, la de la desobligación del *ius*. Es así como no intimar compele, contra todo derecho.

La respuesta del corregidor dio origen a una tercera provisión, el 16 de diciembre, también en el Consejo de Hacienda. En ella menciona el rey que el administrador, Francisco Luengo de Eguía, había presentado en este Consejo la respuesta del corregidor de 2 de diciembre, comunicando su nueva representación e incumplimiento, con la fórmula *obedézcase pero no se cumpla*:

...disteis por respuesta la obedecíais, y en cuanto a su cumplimiento me volvíais a representar los motivos que habíais tenido para no haber cumplido la en ella inserta, porque me suplicasteis mandase sobreseer en su ejecución por lo que miraba al conocimiento de las causas, porque tenéis preso a don Baltasar de Orozco, subdelegado del dicho don Francisco Luengo...

En esta tercera carta se mandaba a Pedro de Herrera Ceballos, que *...sin embargo de la dicha vuestra respuesta dentro de un día de la notificación cumpláis y ejecutéis lo que os tengo mandado por las dichas primera y segundas cartas suso insertas según y como en ellas se refiere...* En caso de nuevo incumplimiento, se mandaba al corregidor de Cuenca que fuese a Huete con audiencia a costa de Pedro de Herrera Ceballos, a hacerle que cumpla lo que le está ordenado, *...que para lo referido, cualquier cosa y parte de ello, y lo de ello dependiente, y la cobranza de los salarios y costas que en ello se causaren, doy al que de vos lo ejecutar poder y comisión en forma cumplida y bastante que al caso convenga, con inhibición al dicho mi corregidor de la ciudad de Huete y las demás justicias de ella y de*

⁴² SERNA Y CANTORAL, D. de la: "Por la Santa Iglesia catedral de Salamanca, cuyo derecho coadyuvan las iglesias de Castilla y León con la justicia y regimiento de la ciudad de Salamanca, sobre que no ha de ser oída la ciudad en la pretensión de poder vedar la saca del trigo, sin orden del Consejo, y que se ha de mandar guardar lo acordado por el Consejo, en auto de 15 de julio de 1675", Salamanca, 1675, BN, Porcones, 236 (32), pp. 15 y 17.

estos mis reinos y señoríos. Teniendo en cuenta la desobediencia jurídica del corregidor de Huete, los poderes que se daban a este juez comisionado eran estrictamente ordinarios, no sobrepasaban el derecho. Ello con la salvedad de que, además de contar con la inhibitoria, iba con audiencia –compuesta además del juez, de escribano y alguacil– para asegurar al comisionado, con su autonomía de la ciudad, la asistencia y el instrumento legal necesario para llevar a fin su cometido.

Una vez requerido el corregidor de Huete con la carta, contestó en los mismos términos que lo había hecho con anterioridad, el 19 de diciembre:

...que la obedece con el respeto debido, y en cuanto a su cumplimiento que su merced responde lo que respondido tiene a la primera y segundas sobrecartas, y que le toca a su merced el conocimiento de la causa, como corregidor, y a su majestad y señores de su Real Consejo de Castilla y Real Chancillería, por ser de quebrantamiento de jurisdicción, y forma competencia, y protesta dar cuenta a su majestad y señores de su Real Consejo de Castilla y al señor fiscal para que la forme, y en ella se declare a quién toca el conocimiento de esta causa, y que declarándose tocar a su majestad y señores de su Real Consejo de Hacienda está presto de obedecer y cumplir con lo que se le manda por dichas reales provisiones, y esto dio por su respuesta...

La respuesta se encuadra en el rigor de pautas estrictamente legales. La división e independencia de la *iurisdictio*, que no se subordina, el amojonamiento horizontal de atribuciones, todo salvaguardado por las garantías que se originan en la desobligación del derecho: la desobediencia jurídica de la fórmula *obedézcase pero no se cumpla*, la protesta formal, la representación jurídica, y finalmente, la competencia jurisdiccional. Cada ministro tiene su propio sistema de referencia legal, que si su origen está en el monarca, porque *Las jurisdicciones única, y privativamente son del príncipe, y no las puede usar, ni ejercer sino es el mismo príncipe, o quien tuviese su especial privilegio, título, o mandato*⁴³, teniéndolos, se ejerce mediante la representación que del rey tienen y ponen en práctica los distintos tribunales. Ello hacía posible una ubicuidad jurisdiccional que si se puede adscribir a una probabilidad del derecho variada, no puede hacerlo para romper con él. En este caso, se ven confrontados el Consejo de Castilla y Real Chancillería, por un lado; y por otro, el desafío legal del Consejo de Hacienda. No intimar desafiaba el *ius*. El problema que se plantea con la ausencia de intimación en los años de la reforma es que los ministros del administrador proceden, no como una jurisdicción limitada y amojonada, sino que, se desvinculan de la *iurisdictio* privilegiando su acción administrativa, lo que los sumergía en una nada sin efecto alguno. Teniendo en cuenta la frecuencia con que se subdelegaban las comisiones, ello estaba lejos de ser una cuestión banal. No se estaba debatiendo un problema de *auctoritas*, y de jerarquía, que no la había, sino la actualización del derecho, su interpretación, su forma de ejecución, la legalidad misma, que la administración no ocupe el espacio de la *iurisdictio* con una nueva materia sin “certidumbre de substancia”⁴⁴. Porque la autoridad la da el derecho y el legítimo motivo, no la mano poderosa y el dictamen político⁴⁵, si no está la substancia del *ius* no hay *auctoritas*, no hay acción administrativa. Es así como la intimación no solo era una garantía jurídica, sino una garantía de la legalidad, del mismo derecho, no solo de sus normas y principios, sino de su misma naturaleza, la de su ausencia de compulsión.

⁴³ ALCANTUD, J. de: *op. cit.*, fol. 14v.

⁴⁴ El concepto en “Un papel sobre advertencias dadas a su majestad” [la BN fecha la publicación en los siglos XVI-XVII], BN, Mss., 13.239, fols. 342r-342v.

⁴⁵ JORDÁN DE FUENTEMAYOR, B.: *op. cit.*, fol. 19v.

9. LA FORMA

Finaliza el expediente con el parecer del fiscal y el dictamen del Consejo de Castilla, ya en el mes de enero de 1680. Refiere el fiscal:

Y porque siendo los procedimientos de dicho corregidor sobre exceso cometido contra la jurisdicción ordinaria y ofensa que se le hizo en el ejercicio de otra, sin habérsela hecho notoria primero, el castigo de defecto de solemnidad tan indispensable en derecho y las diligencias que conducen a la reintegración del pósito tocan privativamente a la jurisdicción ordinaria, por lo cual el vuestro Consejo de Hacienda en lo referido ha obrado y obra con notable defecto de jurisdicción, para que así se declare forma competencia.

Teniendo en cuenta que *...la jurisdicción no se concede para ofensa de nadie, sino para administrar justicia...*⁴⁶, el regidor como subdelegado ha pervertido la *iurisdictio*, no ha administrado justicia, su acción puede considerarse opuesta a ella, porque es, o se muestra, diferente. Mientras que, por lo que se refiere a aquellas palabras indecentes que mencionaba la carta del rey despachada por Hacienda, carecían de fundamento: el corregidor no hacía otra cosa que administrar justicia. A continuación suplica que se haya por formada la competencia, *...mandando que los relatores vengan a hacer relación en la forma ordinaria citadas las partes, y que en el ínterin no se innove, pues es justicia que pide*. Es decir: el fiscal confirma la desobediencia jurídica del corregidor de Huete como un acto conforme a derecho, asimismo empata la jurisdicción de la hacienda, que se aleja de toda pretensión de innovación legal. Sin esta última pierde sus pretensiones de compulsión, lo cual podría avocar a que se desatase la tributación. El fiscal reconoce el exceso cometido contra la jurisdicción ordinaria por no haber intimado su comisión el regidor. Confirma la desobligación que era inherente al acto de intimar. No es un mero formulismo, es solemnidad, como otras solemnidades del derecho, cuyo protocolo no se debe eludir; luego esa solemnidad, como las demás, es rigor formal, garantía jurídica a la que obliga el derecho. La forma es la expresión genuina de las garantías que identifican ese *ius*. Porque es así, *...cuando su majestad da forma para que se ejecute lo que ordena, si se falta a ella, lo que se obra no sirve de efecto alguno*⁴⁷. De nuevo la falta de efecto. Si no hay forma se manifiesta un vacío legal, la nada. Sin la intimación estaríamos en los términos de una *herejía formal*⁴⁸. Así, se puede denunciar que *...hizo un auto tan sin forma, contra mí, que es un embrión de inquisición, pues le faltó la razón, y motivo legítimo, alma y vida de estos autos, y así se ha desvanecido*⁴⁹. La forma llama a la legalidad, pero también a la legitimidad. Con la intimación está el rigor de una forma del derecho que es su alma y vida; sin ella no está el *ius*, su solemnidad y sacralidad, con sus recursos y garantías. Frente a la nulidad está, por tanto, la fuerza y vigor de la forma. Ella es contraria a la arbitrariedad, pero asimismo lo es de nuevo a la extralimitación, su pretendida legalidad, la que los reformadores colocaron en la novedad de una *potestad económica*, conceptualizada por los ministros y sus doctrinarios, de la que eran portadores los administradores

⁴⁶ “Manifiesto legal por el señor Joseph González, caballero de la orden de Santiago, del Consejo y Cámara de su majestad y de la Santa General Inquisición... en exclusión de los cargos que se le han sacado por el tiempo que fue presidente de dicho Consejo de Hacienda” [posterior a 6 de mayo de 1665], BN, Porcones, 220 (17), fol. 45r.

⁴⁷ “Por don Pedro Valle de la Cerda, caballero de la orden de Calatrava, de los Consejos de Guerra y Cruzada, sobre la recusación que ha interpuesto del señor licenciado don Francisco Antonio de Alarcón, del Consejo, y presidente del de Hacienda” [posterior a 1640], BN, Porcones, 244 (14), fol. 2v.

⁴⁸ Término empleado por Joseph González señalando el error por el que fue condenado Lorenzo Bouchel, “Seis causas de recusación propuso el señor Joseph González al señor don Lope de los Ríos...” [posterior a 1664], BN, Porcones, 100/16, fol. 4v.

⁴⁹ JORDÁN DE FUENTEMAYOR, B.: *op. cit.*, fol. 5r.

y superintendentes de la hacienda. Por tanto, con la observancia y cumplimiento de la intimación por todos los ministros se está debatiendo no solo el control legal de las comisiones de Hacienda y su ajuste a derecho, sino además la supervivencia de una garantía, con ella la efectividad e inviolabilidad de cualquier garantía en cualquier materia, como expresión genuina del derecho, que encierran las solemnidades y formalidades legales, con todo ello también la forma, y el alcance, de la tributación de los súbditos. No hay tributación sin derecho, sin forma, ubicada en aquella ausencia de efecto, en una nada sin *ius*. En cuanto al asunto del pósito, es una atribución tradicional de la jurisdicción ordinaria. Ve confirmada por este lado sus competencias, su autoridad en la ciudad, no de por sí, sino como expresión del derecho.

El dictamen del Consejo de Castilla, en Sala de Gobierno, fue *Hase por formada esta competencia. Hágase relación de ella en la forma ordinaria citadas las partes y en el ínterin no se innove*. El Consejo confirma tanto los procedimientos del corregidor como el parecer del fiscal. Además, empata la *iurisdictio*, se empataba la hacienda. Efectivamente, el corregidor de Huete no procedía desligado de las instituciones, era independiente y representaba su territorio jurisdiccional, su libertad, pero su actualización del derecho llamaba a los fundamentos legales de la monarquía que implicaban a todas las instituciones, de las que el Consejo de Castilla, fiel defensor del derecho, no se separa. Fundamentos que eran desafiados por estos ministros de Hacienda, cuya jurisdicción era odiosa y debía ser limitada, frente, conforme a derecho común, a la generalidad e ilimitación de la jurisdicción ordinaria. En último término, la formación de la competencia, bajo la égida del propio Consejo de Castilla, servía de garantía del cumplimiento del derecho. No se dictamina directamente a favor de la jurisdicción ordinaria con un auto decisivo, sino que se entrega su determinación a otra garantía del derecho. Prevalece el *rigore iuris*, los procedimientos, la forma, con sus solemnidades, esas que son garantes.

10. CONCLUSIÓN

Con este ejemplo, en lo que se refiere a la intimación, es evidente que no se están disputando directamente las competencias de Hacienda, injerirse a toda costa en su administración y gobierno, si bien no se olvidaba el corregidor de hacer ver la aptitud de los corregidores a este respecto, pues si vivaz, no dejaba de ser una sugerencia, era hecha como consecuencia de una irregularidad jurídica, y aunque hubiese ordenado a los escribanos a despachar ante él, pues ello bien podía atribuirse al vacío jurisdiccional que se había producido, para que no lo hubiera, pero sobretodo con ello daba nueva forma y tiempo a la hacienda. Por tanto, se trataba de algo más trascendental, que no se podía desatender: que todos los ministros, sean administradores o sus subdelegados, cumplan con el derecho, con sus formalidades y garantías, que todos guarden la forma y el orden judicial, sus requisitos y obligaciones. Ello significa que los ministros de la hacienda no pueden obrar sueltos y desligados, porque el derecho obliga a todos de forma integral: *No negamos, que el superintendente tiene obligación a poner cobro en todo lo perteneciente a la real hacienda; pero esto se debe entender con el derecho, y equidad que incluye*⁵⁰. El superintendente, y sus subdelegados. Por imperiosa y trascendente

⁵⁰ BAZÁN, J. C.: "El contador don Nicolás de Robledo, en el juicio de visita, manifiesta el inculpado procedimiento del conde de Molina de Herrera (que está en el cielo) que fue de los Consejos de Guerra, y Hacienda de su majestad, asistente y maestro de campo general de esta ciudad de Sevilla, y su tierra, superintendente general de las rentas reales de ella, y su tesorería, y responde a los cargos que se le han hecho como contador de la su-

que sea su misión, no hay ni *iurisdictio*, ni acción administrativa independiente, vacía, sin derecho. La intimación no era ni un simple formulismo, ni una mera deferencia a la autoridad. Su tarea era conocer la letra de cada carta de comisión, su legalidad y su oportunidad, y su consiguiente cumplimiento por el juez comisionado; no arrebató competencias para entregárselas a la jurisdicción ordinaria, pues no pervierte el amojonamiento jurisdiccional, que se le reconoce al juez comisionado, pero al que está obligado a incorporarse como una jurisdicción más, no con una supremacía que neutralice la *iurisdictio*. Esa incorporación, con su eventual desobediencia, es la que estaba defendiendo el corregidor. Se está dirimiendo por tanto que la hacienda se sujete a derecho, a sus controles y garantías —y si sus ministros no lo hacen, es cuando puede entrar el juez ordinario para garantizar el orden judicial y la forma del derecho. Aquí es donde se sitúa la petición del corregidor. Esos controles y garantías están a disposición de una autoridad que con su personificación del *ius* ampara y protege al súbdito y a la comunidad, sus derechos e intereses, no de la *auctoritas* de por sí. Es un conflicto legal el que se dio con motivo de la reforma de la administración de la hacienda, porque las jurisdicciones enfrentadas defienden una “legalidad”, o “cuasi legalidad”, diversa, que incluso se llegan a negar mutuamente. Las garantías jurídicas de los súbditos, con los recursos del derecho, dependían de que procedimientos como la intimación, ella misma garantía, combinada con otra garantía jurídica, la vía de exceso, que el mismo acto de intimar confirmaba y habilitaba, y que estaban entreveradas en el orden jurisdiccional, no fuesen vulneradas. Es decir: la intimación que era una garantía de la autoridad, al serlo en tanto que lo era del derecho, ejercía como garantía jurídica de los súbditos, pues habilitaba sus recursos, peticiones, súplicas, quejas que podían incoarse ante el juez intimado; pero que este mismo juez podía por su parte elevarlas al Consejo de Castilla. Su fin era, por tanto, la protección y el amparo integral. Se trataba asimismo de impedir que actos nulos legalmente pudiesen tomar ser y extenderse abocando a un derecho inexistente, el que crea la obligación *absoluta* o *económica*, y de que los administradores y superintendentes de la hacienda, bien como personas particulares, bien sin la corporeidad y materia de jueces, incoasen procedimientos administrativos vacíos de substancia legal. El derecho, con su materia, y con su naturaleza, la desobligación, no podía prescribir y estar ausente, en ningún espacio y en ninguna circunstancia, ello en un contexto reformista en el que se estaba intentando circunscribir con una nueva ejecución *económica* y *política*. Si es “...gran dicha tener un príncipe que sepa administrar”, ello lo es teniendo presente que “...no es tan soberano el poder de los príncipes, que pueda mudar naturalezas...”⁵¹.

perintendencia, y demás encargos del conde, y como su secretario” [posterior a enero de 1665], BN, Porcones, 110 (34), fol. 26v.

⁵¹ “El príncipe de la filosofía con rara discreción señaló tres calidades que dan total crédito al que dice y disponen al firme y fijo asenso al que oye. Sabiduría, virtud, benevolencia” [siglo XVII?], la publicación es del siglo XVIII, BN, Mss, 11.080, fols. 142v y 151r.